



ELECCIONES SINDICALES EN SECURITAS GRANADA

Enhorabuena a los compañeros de Granada, por conseguir 1 Delegado en las elecciones Sindicales de SECURITAS GRANADA-

CSI-F.....	1
USO.....	5
CCOO.....	4
OGT.....	2
AS.....	1

Enhorabuena al nuevo delegado tras presentarse por primera vez CSif a las elecciones.

Repetición elecciones en ESABE Vizcaya

Tras celebrarse hoy las elecciones en **ESABE Vizcaya** después de las reclamaciones, se pone en conocimiento el nuevo resultado:

CC.OO	3	delegados
UGT	3	delegados
CSI-F	2	delegados
USO	1	delegado.

CSI-F había sacado un delegado y ahora tiene 2.

Nuestra enhorabuena a los elegidos y al trabajo que tiene día a día nuestros compañeros de Vizcaya.

Problemas económicos y de armamento causan bajas en la seguridad de los atuneros

15/01/2010

Un número «importante» de los 54 vigilantes de seguridad privada que protegen a los pesqueros españoles en Somalia han pedido la cuenta en sus empresas y regresarán a España al encontrarse con una situación que «no era la esperada». El portavoz de la Asociación de Escultas en Activo del País Vasco, Santiago González, ha explicado, en declaraciones a Efe, que un grupo de vigilantes que se embarcó el pasado mes de noviembre en los pesqueros, tras el secuestro del atunero Alakrana en el Índico, se ha enfrentado a problemas económicos, de armamento y, en algún caso, de convivencia entre ellos, aunque no con los marineros», según ha precisado.

El problema económico esta relacionado con el plus que acordaron de 4.000 euros

brutos, que no se correspondería con las horas reales de trabajo? Con respecto al armamento, González ha señalado que les entregaron una escopeta «y poco más», lo que no resulta «oportuno ni prudente» para enfrentarse a piratas que utilizan armas automáticas.

Más Atalanta

La ministra española de Defensa, Carme Chacón, circunscribió la cuestión a un problema laboral entre los vigilantes y la empresa y planteó ayer a la alta representante de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, potenciar la misión Atalanta durante el semestre de presidencia comunitaria, con el fin de ser «más eficaces».

Empresa de seguridad niega problemas entre los agentes embarcados en Somalia

Esta empresa sale así al paso de la denuncia realizada por el portavoz de la Asociación de Escultas en Activo del País Vasco, Santiago González, quien dijo ayer que un número "importante" de los vigilantes de seguridad privada embarcados han pedido la cuenta en sus empresas y regresarán a España al encontrarse con una situación que "no era la esperada".

En un comunicado, la dirección de Segur Ibérica califica de "rotundamente falso" que se hayan producido despidos masivos entre estos vigilantes.

"Sólo 6 de los 70 vigilantes de seguridad destinados a este servicio no han superado el periodo de prueba establecido en sus contratos, que por esta causa, han sido rescindidos".

Tras desmentir que haya habido innumerables peticiones de bajas, apunta que "únicamente 4 trabajadores han solicitado por causas personales abandonar el destino y volver a su anterior puesto, una de ellas por enfermedad".

Asimismo la empresa afirma que todos los vigilantes han cobrado en su integridad el salario y complementos acordados, "no existiendo ninguna queja ni con las cantidades ni la fecha de cobro".

Sobre el armamento que manejan, también criticado por la Asociación de Escultas, Segur Ibérica dice que es el autorizado por el Gobierno y del calibre suficiente para repeler las posibles

agresiones de los piratas somalíes.

También puntualiza que todos los integrantes de esta misión cuentan con la cualificación profesional de vigilante de seguridad y en ningún caso se trata de escoltas.

La empresa concluye que sus clientes, los armadores, están "muy satisfechos con la calidad y efectividad" de este servicio de protección. EFE

Malaga. Los usuarios del hipódromo critican la falta de seguridad y servicios

Marga García | Málaga
Actualizado domingo 17/01/2010 10:23 horas

El hipódromo de Mijas continúa su declive con la aquiescencia del Ayuntamiento de Mijas. La última de las actuaciones de la empresa Recursos Turísticos de Mijas, participada en un 87,5% por el Ayuntamiento del municipio y un 12,5% por Unicaja, ha sido rebajar las prestaciones de seguridad del centro y algunos servicios como la iluminación.

Los jinetes que entrenan en las pistas del hipódromo recibieron un escrito de Recursos Turísticos de Mijas SA en el que se les informaba de que a partir del 1 de diciembre del pasado 2009 «no habrá control directo de la zona de pistas». Ante esta inusual situación y el riesgo de que pueda ocurrir alguna caída o accidente, los propios gestores del hipódromo recomiendan que «para hacer uso de la pista hay que ir acompañado de otra persona que advierta en caso de accidente», según la nota que obra en poder de este periódico. Además de no ofrecer los servicios mínimos en caso de accidente, Recursos Turísticos SA dice que «no se hacen responsables de los incidencias que pudieran ocurrir durante los entrenamientos».

Lo usuarios del hipódromo protestan, además, de que otro de los servicios que se ha cortado sin más explicaciones es la iluminación de las pistas a partir de las 7 de la mañana. Los caballos de carrera precisan de unos horarios rígidos y precisos, tal y como ocurre con los deportistas de élite, por lo que entrenan a primeras horas de la mañana siguiendo unas rutinas establecidas. En los meses de invierno no hay a las 7.30 horas y las 8.00 horas luz natural para correr. Los

Sección Sindical **SEGURIDAD PRIVADA**

usuarios se preguntan si es posible que un recinto de carácter público no tenga las medidas de seguridad imprescindibles.

Para el cada vez más reducido grupo de caballistas que mantienen alquilados los boxes del hipódromo la situación es cada día más insostenible. De hecho, de los 322 boxes que posee, sólo unos 100 están ocupados aunque en los inicios de su gestión se llegó a estar casi al completo.

Entre los muchos problemas a los que se enfrenta el centro está la ausencia de un interlocutor, desde que la directora de la Empresa Recursos Turística de Mijas, María del Mar Rodríguez, se dio de baja por maternidad ya que nadie ha sido designado oficialmente para cubrir este puesto. La baja de la gerente, un cargo de confianza del Consistorio sin conocimientos ni experiencia en este sector, coincide con la temporada de carreras que se iniciará en febrero, según fuentes del PP.

En cuanto a la seguridad del recinto el contrato se extinguió el pasado mes de agosto de 2009. Desde entonces, han sido otros trabajadores como mozos de cuadras los que han prestado este servicio, según fuentes de los usuarios de los trabajadores. Pero hasta esta vigilancia desarrollada por trabajadores sin profesionalización en este campo ha desaparecido ante la oleada de despidos que ha sufrido en los últimos años la plantilla.

Ahora en la página web del hipódromo se puede comprobar que existe un concurso público para acceder a los servicios de seguridad del recinto. En el pliego de condiciones se especifica que «la necesidad de celebración del contrato resulta evidente» porque explican que «para el desarrollo de las carreras de caballos es imprescindible por imperativo legal contar con personal de seguridad con una empresa debidamente autorizada por el Ministerio del Interior».

Almería. Una oleada de robos obliga a la Asociación del Mármol a contratar vigilancia privada

El pasado mes de agosto las industrias contabilizaron que les habían sustraído material por un importe de 38.000 euros. AEMA estudia el cierre de caminos principales de acceso a las canteras María José Carrillo / Almería | Actualizado 17.01.2010 - 01:00

Hace ya mucho tiempo que en la sierra de Macael se están produciendo robos de importante calaña, aunque es cierto que en los últimos meses se ha incrementado

la cantidad de elementos que han desaparecido en las canteras de Los Filabres.

La actividad diaria ha descendido de forma importante y hay maquinaria que ya no se usa con la misma frecuencia con la que se utilizaba antes, un hecho del que los ladrones quieren sacar tajada, aunque a partir de ahora lo tendrán más complicado. Y es que la Asociación de Empresarios de Andalucía, AEMA, junto al Ayuntamiento de Macael han acordado ponerse manos a la obra y terminar con esta oleada de saqueos que están sufriendo. De hecho ya han ejecutado una primera medida, que ha sido elaborar un plan de vigilancia de la sierra durante las 24 horas del día. Una iniciativa que han puesto en marcha durante la pasada Navidad, ya que desde el día 24 de diciembre hasta el lunes 11 de enero la sierra estuvo completamente parada, y los empresarios temían las consecuencias que esto pudiese tener para su maquinaria.

Durante esos días el ayuntamiento proporcionó vigilancia desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, y a partir de esa hora el relevo lo tomaba una empresa de seguridad privada contratada por la propia Asociación de Empresarios, para completar la totalidad de las horas. Una decisión que en tan solo dos semanas podría hacerse definitiva, ya que los empresarios han notado como durante la festividad navideña se han reducido los hurtos, y esperan que con esta actuación puedan eliminarse de forma total.

En la Asociación de Empresarios han comenzado a estudiar todas las posibilidades que se le plantean y a analizar futuras actuaciones, como podría ser el cierre de algunos caminos principales, ya que las canteras son espacios abiertos, lo que posibilita que se acceda con una gran facilidad a ellas. En estos momentos ya hay ingenieros técnicos sobre el terreno estudiando una serie de actuaciones que deberán presentar al ayuntamiento para que este las analice y decida si es lo más correcto, ya que el consistorio es el propietario de esas vías, y es el que tiene la última palabra. También los directivos de la empresa de seguridad tendrán que plantearles el sistema diseñado para esta zona y que mejor se acoja a la dificultad que de por sí presenta el entorno. Entre las diversas posibilidades barajan la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos, así como agentes que complementen estas actividades.

Una decisión que comenzó a fraguarse tras el mes de agosto, uno de los más complicados ya que se frena la actividad de las canteras almerienses, y en el que la

totalidad de los robos en las distintas empresas que forman parte de la Asociación superó los 38.000 euros, unas cantidades que los patronos no estaban dispuestos a soportar.

"En multitud de ocasiones estos hurtos no suponen una gran cuantía económica, el problema es el engorro que provocan, porque dichos extráneos hacen que paren el ritmo normal de trabajo, ya que no dispones de suministro para seguir con tus labores", cuenta uno de los empresarios que lo ha sufrido y que prefiere no desvelar su identidad.

No obstante también se han producido sustracciones por una importante cuantía económica, ya que en una ocasión lograron extraer parte de la maquinaria de una pala excavadora, lo que supuso para su dueño la pérdida de hasta 24.000 euros. Las acciones más repetidas son los saqueos de mangueras, que llevan cobre por dentro, un material que utilizan para venderlo de forma posterior. También vacían los depósitos de gasoil de las máquinas, así como piezas de las mismas, que luego liquidan.

En Mármol Gonzalo Esteban en los últimos días han llegado a robar hasta en tres ocasiones, y todas ellas para extraer el gasóleo de la maquinaria industrial que utilizan en la cantera. Sus responsables han contado a El Diario de Almería, que estas actuaciones le han supuesto una pérdida de 750 euros, cifras bastante importantes y mucho más en estos momentos de crisis. Además recuerdan como en otras ocasiones sí que les han sustraído herramientas, bombas, y mangueras con cables de cobre.

Fuentes cercanas a la Guardia Civil de la zona nos han contado que están tomando cartas en el asunto y se encuentran vigilando los distintos entornos de las canteras, de hecho el pasado día 5 de enero cogieron "in fraganti" a dos personas robando en una de ellas.

Los saqueos en esta zona industrial siempre han existido, sin embargo debido a la complicada situación que se vive se están incrementando de forma considerable, hasta tal punto que los patronos aseguran que la situación es insostenible. Por eso la opción de contratar un sistema de vigilancia que actúe durante las 24 horas del día es la que mejor se acoge a las necesidades de una comarca, que está sufriendo de forma incipiente los duros efectos de la crisis económica, y a eso hay que sumar dificultades añadidas como por ejemplo las que presentan este tipo de robos.

Segur Ibérica dice que solo 6 de 70 vigilantes no han superado el período de prueba

Fecha de publicación:
16/1/2010

Segur Ibérica, la empresa responsable de la seguridad en los atuneros del Índico, negó ayer a través de un comunicado que se hayan producido despidos masivos entre los vigilantes del servicio. La firma dice que solo 6 de los 70 agentes no han superado el período de prueba y, por tanto, sus contratos han sido rescindidos. Tampoco es cierto, según Segur Ibérica, que haya habido innumerables peticiones de bajas: fueron cuatro los que solicitaron abandonar el destino y otro causó baja por enfermedad. La empresa señala que no ha recibido quejas de los armadores y que los vigilantes disponen de armamento de calibre suficiente para repeler las agresiones.

Los vigilantes de los atuneros tienen orden de disparar a matar a 600 metros

El protocolo de protección prevé que se emplee "toda la fuerza letal" cuando los piratas desoigan los disparos de intimidación.

P. CERRADA Las normas de enfrentamiento entregadas por la empresa responsable de la protección de los atuneros que faenan en el Océano Índico a los equipos de seguridad desplegados en cada barco contemplan que en caso de ataque los agentes, tras efectuar tiros intimidatorios y los piratas no hagan caso, disparen a matar para evitar el abordaje. Según señala el Manual de Protección de Segur Ibérica, al que ha tenido acceso este diario, cuando el barco pirata se encuentre "a unos 600 metros de distancia o en caso de recibir fuego enemigo, se empleará toda la fuerza letal, con contundencia, para evitar el abordaje". Además de este protocolo, vigilantes consultados por este diario aseguran que en el vuelo que trasladó de El Altet a las Seychelles a 54 vigilantes un responsable de la empresa les explicó que en caso de ataques debían disparar a matar y luego poner en el parte "sin novedad".

Una portavoz de la empresa aseguró que "no hay indicaciones a los vigilantes para que disparen a matar" y señaló que el protocolo es un manual confidencial que "tiene los visados de Defensa e Interior". Asimismo, Segur Ibérica asegura que no tienen constancia de ninguna incidencia entre unos vigilantes y un capitán de un atunero que les instó a matar a los piratas "sin contemplaciones", como ha

denunciado a este diario un agente de seguridad.

El apartado del manual referido a los enfrentamientos indica que el uso de la fuerza "se limitará siempre al mínimo imprescindible para tratar de disuadir a los piratas y conseguir que abandonen su ataque". No obstante, señala a continuación que "el derecho de autodefensa o legítima defensa, según la legislación penal, no está limitado". Por ello, añade el protocolo, "en caso de que la disuasión no surta efecto se empleará la fuerza contra los agresores para evitar a toda costa que se produzca el abordaje y el secuestro".

El manual establece cuatro pasos en caso de que se detecten embarcaciones sospechosas que se aproximen. Así, la primera medida es dar un aviso por la emisora para que desistan de su actitud porque llevan un equipo armado a bordo. Si el barco pirata continúa acercándose "se harán disparos de intimidación al aire" y "si todavía no desiste y sigue cerrando distancia o si se detecta personal armado a bordo, cuando llegue a la distancia eficaz de las ametralladoras, unos 1.000 metros (0,55 millas), se abrirá fuego por la proa de la embarcación, acercando la distancia del fuego, según se vaya acercando". El cuarto y último paso es la utilización de "toda la fuerza letal" para evitar el abordaje.

"Le dijimos al capitán que no somos asesinos"

Uno de los vigilantes que trabajó en uno de los atuneros, el malagueño José Sánchez, aseguró a este diario que tras embarcar los cuatro agentes en el Txori Toki "su capitán nos dijo que había que matar a los piratas sin contemplaciones, pero le dijimos que no somos asesinos". Este vigilante de seguridad, que fue despedido al regresar a España, explicó además que tuvo un incidente con este capitán porque sufrió graves quemaduras del sol en la cabeza tras perder su gorra y "no quiso desembarcarme a pesar de estar dos días sin conocimiento y diez días trabajando con 39,7 grados de fiebre".

Petición de 912 años para seis 'grapos' por matar a dos vigilantes

La Audiencia Nacional juzga desde hoy el asalto a un furgón en 2000
EL PAÍS - Madrid - 18/01/2010

El fiscal pide un total de 912 años de cárcel para seis miembros de los GRAPO, incluido su histórico jefe, Manuel Pérez Martínez, el Camarada Arenas, por el atraco a un furgón blindado de la empresa Prosegur en Vigo (Pontevedra), en el que

fueron asesinados dos vigilantes y otras cuatro personas resultaron heridas. El juicio, que comienza hoy en la Audiencia Nacional, se dirige contra el también histórico Fernando Silva Sande, y los grapos Israel Torralba, Mónica Refojos, Esther González Ilarraz y Marcos Martín Ponce.

El 8 de mayo de 2000, un comando de seis miembros de los GRAPO colocó tres cargas explosivas al paso del furgón blindado de Prosegur que hicieron explosión cuando el vehículo se dirigía a la Gran Vía de Vigo, en un traslado de fondos del Banco de España.

La carga principal fue colocada en el centro del carril de la carretera, alcanzando al furgón y causándole importantes daños que lo inutilizaron. Dos cargas más hicieron explosión y otra no llegó a estallar.

Al detenerse el furgón, los grapos abrieron fuego con sus armas desde ambos costados. Los vigilantes jurados Jesús Sabral Otero y Manuel Espada Pérez salieron del vehículo para repeler la agresión, resultando el primero gravemente herido por los disparos de los agresores. Espada consiguió refugiarse en el compartimento trasero de carga, y aunque sufrió lesiones por disparos de Silva Sande, consiguió alcanzar al asaltante Marcos Martín Ponce. El conductor del furgón, Gonzalo Torres Lage, salió por la puerta izquierda del vehículo siendo alcanzado por disparos del comando terrorista.

Durante el atraco, el grapo Israel Torralba consiguió colocar una bomba lapa en la ventanilla posterior. Una vez abatidos los vigilantes de seguridad, el jefe del comando terrorista, Fernando Silva, logró apoderarse de tres bolsas de plástico con moneda fraccionaria, que abandonó antes de introducirse en el vehículo preparado para la huida.

Como consecuencia de los disparos fallecieron el conductor del furgón, Gonzalo Torres, y el vigilante Jesús Sobral, y heridos Manuel Espada y el grapo Martín Ponce. También resultaron con lesiones tres transeúntes.

Detenido tras intentar estafar en un comercio de San Sebastián cambiando los precios de las etiquetas de los productos

SAN SEBASTIÁN, 17 Ene. (EUROPA PRESS)

Un joven de 25 años fue detenido ayer en San Sebastián acusado de intentar realizar

una estafa en un establecimiento comercial, donde cambió las etiquetas de material deportivo valorado en 766 euros por otras cuyo valor total era inferior los 170 euros, según informó hoy el Departamento vasco de Interior.

Alrededor de las dos de la tarde, agentes de la Ertzaintza contactaron con el encargado de seguridad de un establecimiento de venta de ropa y material deportivo de la capital que les informó de un intento de estafa por parte de un joven que tenían retenido. Al parecer, el vigilante había visto al individuo cambiando etiquetas y, cuando el joven abandonaba el establecimiento tras pasar por la caja, fue interceptado para comprobar las sospechas.

El encargado de seguridad observó anomalías en las etiquetas de los productos y comprobó que el precio que figuraba en el ticket de compra, alrededor de 168 euros, no se correspondía con el real, que ascendía a 766 euros. Los ertzainas procedieron a la detención del joven, acusado de un delito contra el patrimonio.

El intrusismo en la seguridad privada se dispara con la crisis

Las multas, que pueden alcanzar los 600.000 euros, se duplicaron en 2009 18.01.10 - 00:57 -
MAITE MARTÍNEZ BLANCO
mtmartinezblanco@gmail.com |
ALBACETE.

El intrusismo ha sido siempre un problema en el sector de la vigilancia privada. Pero con la crisis se ha agravado. Las empresas meten la tijera a sus gastos y terminan contratando personal sin habilitación para que hagan las funciones de vigilancia. No están preparados, pero resulta más barato. Lo que quizás no sepan es que se enfrentan a multas pueden alcanzar los 600.000 euros.



La fórmula a la que recurren son las llamadas empresas de servicios, detrás de muchas personas que trabajan como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares de seguridad, controladores de accesos o conserjes, lo que hay son intrusos que

ejercen unas labores de seguridad que la Ley de Seguridad Privada sólo permite realizar a los vigilantes habilitados por el Ministerio de Interior.

Sólo pueden llevar porra y grilletas y lucir la placa blanca con letras en rojo los vigilantes que estén autorizados. Y éstos sólo deben hacer las funciones que le encomienda la ley no están, por ejemplo, para supervisar una caldera de calefacción o recoger los carritos del supermercado. Lo suyo es vigilar para garantizar la seguridad.

Para ser vigilante de seguridad es necesario superar una formación en un centro reglado, en Albacete hay tres. Y después aprobar un examen que hace el Ministerio de Interior, donde se ponen a prueba los conocimientos del vigilante y su preparación física, además de aportar el oportuno reconocimiento médico. Superadas esas pruebas, que se hacen en Valencia, ya se tiene la habilitación para trabajar como vigilante, pero no pueden hacerlo directamente, sino que estos profesionales tienen que estar contratados siempre a través de una empresa.

Bajos sueldos

El sueldo de un vigilante no es que sea para tirar cohetes, poco más de 1.000 euros brutos al mes fija el convenio, aunque aquellos que hacen horas extras o trabajan por las noches pueden ganar algo más, hasta unos 1.200 euros si trabajan ocho horas nocturnas, apuntan fuentes sindicales. Pese a ello, recurrir a personal sin habilitación sale más barato, pues un auxiliar no cobra más allá del salario mínimo interprofesional, 633 euros brutos mensuales por doce pagas. «Nosotros hacemos infinidad de denuncias, pero no es fácil demostrar que alguien que está como conserje al mismo tiempo hace de vigilante», explica Francisco Marcos Salvador, delegado de CC OO en este sector, que resalta la voluntad de la Policía Nacional por evitar la presencia de estos intrusos, pero se queja de la falta de medios para ejercer un mayor control policial.

Este control es cosa de la Unidad Provincial de Seguridad Privada, cuyo responsable el subinspector jefe, Sebastián Sotos, hace todo lo posible por acabar con el intrusismo en este sector. Siempre que conocen un posible caso, allá que se presentan y no dudan, por ejemplo, en simular un robo para comprobar si aquel que está en la puerta como conserje, a la hora de la verdad ejerce como vigilante, una prueba que les sirvió para demostrar un caso de intrusismo en una perfumería de la capital hace poco.

El subinspector jefe advierte a las empresas de que si en uno de estos controles son 'cazadas', «no les va a compensar» el ahorro de costes, «porque a quien incumple la norma, se le sanciona» y las multas van desde los 30.000 hasta los 600.000 euros.

«No tenemos un afán recaudatorio, lo que queremos es que las empresas funcionen lo mejor posible», recalca este responsable policial, por eso antes de llegar a la sanción se suele hablar con las empresas para apercibirles de que no están actuando debidamente.

La decisión última de si se impone o no una multa es cosa de la Subdelegación del Gobierno, pero el subinspector Sotos destaca la «buena sintonía» que existe entre la policía y la autoridad gubernativa. Sólo el año pasado se impusieron 12 sanciones por intrusismo, el doble de las que solían ser habituales. Uno de los casos de intrusismo más grave se detectó en Albacete hace unos tres años, en pleno boom del ladrillo, en las obras de urbanización de la barriada construida en torno a la Facultad de Medicina. Tras una fuerte campaña de inspecciones, la Policía Nacional terminó deteniendo y enviando a prisión al cabecilla de un clan gitano que presionaba hasta conseguir que los contratasen como vigilantes en las obras.

En la provincia de Albacete habrá unos 500 vigilantes privados en activo. Y entre la crisis y estos casos de intrusismo cada vez lo tienen más difícil para encontrar trabajo.

Mucho paro en el sector

Empresas que cierran; fábricas, centros comerciales o establecimientos públicos que optan por recortar en horas de servicio e instalaciones donde directamente se opta por prescindir de la vigilancia personal y confían toda su seguridad a otros sistemas. «Quito el vigilante y dejo la alarma y si me roban, pues mala suerte, recurro al seguro, es lo que piensan algunos», explica el subinspector Sotos, que añade que si esto se hace en Albacete es porque la provincia es bastante segura y no tiene un nivel excesivo de robos.

Sólo un ejemplo, hasta no hace mucho, todos los huertos solares tenían un vigilante, ahora casi ninguno cuenta con la presencia física de estos profesionales. Por eso el paro está tocando de lleno a este sector, y que según CC OO, hasta las administraciones públicas están recortando horas de servicio en su vigilancia. Si hasta hacer poco más de un año, las empresas de vigilancia andaban como locos buscando profesionales habilitados, ahora eso no sucede, «me

atrevería a decir que de los más de 300 vigilantes nuevos que se habilitaron el año pasado, no ha trabajado ninguno», acierta a decir el subinspector Sotos, que señala el punto de inflexión en enero de 2009. Y el número de vigilantes en paro aumenta no sólo porque haya menos trabajo, sino también porque muchos parados han visto en este oficio una posible salida a su situación -debido, además, a que se les ofertan cursos subvencionados para formarse en este campo-, de tal manera que si antes las promociones de vigilantes eran de 30 personas, ahora son de 80.

Atrás quedaron los tiempos en los que hablaba de un déficit de 20.000 vigilantes en toda España, -de eso hace unos tres años-, que llevaba a pedir a las empresas un cambio legislativo que permitiese entrar a los inmigrantes extracomunitarios en la seguridad privada.

Albacete. Con revólver o sin él, como escoltas o como detectives

18.01.10 - 00:43 -

Los vigilantes privados son un apoyo fundamental para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siempre se ha dicho que dos ojos ven más que cuatro, y los cerca de 500 vigilantes que trabajan en la provincia de Albacete, permiten llegar a la Policía y a la Guardia Civil a muchos rincones donde, sin su existencia, sería casi imposible. «Nos dan mucha ayuda, porque son más ojos en la calle, en las fábricas, en los polígonos industriales, en los institutos...», explica el subinspector Sotos, «por eso -añade- cada año se otorgan menciones honoríficas a los profesionales que más colaboran con nosotros». Y es que, ante la mínima sospecha de que se está cometiendo un delito, su obligación es la de avisar a las fuerzas públicas. Los vigilantes no pueden detener, pero sí retener al supuesto atracador hasta que lleguen los agentes para hacer la detención oficial.

Siempre tienen que ir uniformados, llevar placa, defensa y grilletes. Los vigilantes pueden especializarse, bien como escoltas, y entonces se les deja trabajar de paisano; bien como vigilantes de explosivos, función que en Albacete hacen, por ejemplo, en un polvorín de Montealegre del Castillo.

La mayoría no llevan revólver ni pistola, aunque hay algunos que sí están autorizados, como son los que están destinados en bancos, joyerías o traslado de dinero o valores. También la Subdelegación puede dar una autorización especial para que lleven arma a quienes vigilen centros de alto riesgo en caso de

sufrir un ataque, como pueden ser aeropuertos o centrales eléctricas, y, eventualmente, aquellos que vigilan polígonos industriales o urbanizaciones muy alejadas de la ciudad. No obstante, por aquello de que a las armas las carga el diablo, las autorizaciones se dan con cuantagotas.

A la vigilancia privada también pertenecen los detectives privados, en Albacete hay cinco empresas, que sólo pueden actuar en asuntos privados, en el momento que descubren un delito deben comunicárselo a la policía. Luego están los vigilantes que se encargan de la custodia de moneda o del transporte de fondos, los que vigilan las centrales de alarmas y los guardas de campo.

Administración y empresarios reclaman una regulación de la videovigilancia privada

Sólo está regulada por la Protección de Datos

Administración y empresarios reclaman una regulación de la videovigilancia privada

- * Las nuevas tecnologías cada vez permiten instalaciones más baratas
 - * No hay ninguna normativa que especifique los tramites para colocar cámaras
 - * Todas las empresas que captan imágenes deben informar con carteles
- Germán González | Barcelona

Los ladrones siempre entran de noche. Al menos es lo que nos cuentan en los anuncios cada vez más frecuentes por canales de teletienda que, junto a fajas adelgazantes, máquinas de ejercicio y babas de caracol quieren vender sistemas de videovigilancia. Las nuevas tecnologías cada vez permiten instalaciones más baratas y lo que en un principio parecía un mercado exclusivo para empresas se ha abierto al uso doméstico.

Anna Medina, la portavoz de la patronal de empresas de seguridad privada Acaes, destaca esta "popularización" de unos sistemas que "hasta hace poco eran exclusivos de entornos muy restringidos por sus aplicaciones específicas o su elevado coste". Además, indica que se ha "normalizado" su uso en comercios, aparcamientos, empresas, escuelas o comunidades de vecinos "que cada vez más los escogen para protegerse contra actos delictivos" porque filman delitos o hacen una función disuasoria.

Pero la masiva implantación de cámaras de seguridad en la vida cotidiana del

ciudadano también abre nuevos debates. El principal es la regulación de este tipo de sistemas, ya que además del control que se efectúa con la protección de datos no hay ninguna normativa que especifique los tramites para colocar cámaras. Maite Casado, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament de Interior, destaca que existe un primer intento de regulación a nivel nacional con una ley de 1997, que afectaba a todos los sistemas y pretendía convertirse en definitiva un año después para la videovigilancia privada, aunque todavía se está esperando el paso definitivo. En este sentido, el Gobierno es quien tiene la competencia para hacer una ley que regule el sector de la videovigilancia privada mientras que la Generalitat podría hacerla cumplir en Cataluña.

Casado considera que una regulación de la videovigilancia, así como su conexión con centrales de alarmas, ayudarían a integrar a todos los operadores, privados y públicos, en un sistema global de seguridad. Además, facilitaría una mejor respuesta por parte de los cuerpos policiales públicos. La administración tiene competencias para actuar cuando se colocan sistemas no homologados y combatir el intrusismo en estas empresas.

Actualmente la seguridad privada debe mostrar las imágenes tomadas por los dispositivos que controlan cuando se haya cometido un delito y a requerimiento de la policía. Pese a esto, no están definidas las limitaciones para poner cámaras, ni hacia dónde se deben colocar, ni justificar que se ponen. Sólo les está prohibido captar imágenes de la calle ya que deben ser tomadas por una instalación pública controlada por la policía. Precisamente, existe una enorme discriminación de los sistemas privados respecto a la videovigilancia pública, que han de superar numerosas exigencias de la administración para ser autorizados.

En Cataluña hay un decreto de 1999 que regula la obtención de imágenes por este sistema por organismos públicos y que es un desarrollo de la Ley de 1997. La normativa también creó una Comisión de Videovigilancia con representantes de diversas administraciones y presidida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La presidenta del TSJC, Maria Eugenia Alegret, destaca que la Comisión sólo puede autorizar la videovigilancia pública, o la que realizan empresas privadas para los organismos públicos, y establece un fuerte control para permitir la presencia de cámaras en edificios y lugares públicos, los que piden las administraciones, así como las renovaciones periódicas de estos permisos. Alegret explica que se evalúa

Sección Sindical SEGURIDAD PRIVADA

"caso por caso" para saber si las cámaras solicitadas no vulneran ningún derecho fundamental como la intimidad, si cumplen el objetivo de seguridad por el cual se piden y, sobre todo, qué se hace después con las imágenes captadas.

La Comisión se reunió el año pasado ocho veces con 79 acuerdos, no todos para dar permisos. En uno de sus últimos encuentros en octubre pasado se aprobó la instalación de nueve cámaras en tres puntos de Ciutat Vella en Barcelona, aunque se rechazó ubicar seis más en la Rambla, como pidió el consistorio. La Comisión aprovecha sus reuniones para reclamar al Ministerio del Interior que las renovaciones no sean tan periódicas y sobre todo un mayor control de la videovigilancia privada, que no tiene que cumplir tantos requisitos como la pública. A esta petición también se suma la patronal Acaes que considera que aumentará "la seguridad jurídica" de las empresas que las coloquen ante posibles reclamaciones pese a que piden que el proceso administrativo para pedir las no aumente su complejidad.

De momento, la única regulación de la videovigilancia privada es la Ley de Protección de Datos. Los ciudadanos han tomado conciencia de la importancia que tiene su imagen filmada, como un dato más, y se han incrementado las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) porque se ha obtenido sin consentimiento. También se han disparado en los últimos años las peticiones para crear ficheros de videovigilancia privados, pero no sólo desde empresas, sino desde otras asociaciones como comunidades de vecinos.

En este sentido, se pasaron de 341 ficheros en 2007 a 1.108 en 2008 en el Registro General de Protección de Datos, mientras que las entidades que se declaraban responsables de cámaras de videovigilancia pasaron de 200 a 21.000 en dos años. La memoria de la AEPD de 2008 destaca que las actuaciones previas de la inspección de videovigilancia suponen un 15,5% de todas las que se hicieron y las resoluciones de procedimientos sancionadores en este ámbito aumentaron en un 633%, aunque acabaron con infracción el 61,3% de los casos.

Cataluña también es pionera en esta protección de datos en los ficheros de videovigilancia. L'Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) emitió hace casi un año una instrucción para que este control de los datos también afecte a los archivos de sonido registrados cuando se filman imágenes. Además, piden que se

realice una memoria justificando la finalidad de la petición del archivo por videovigilancia, sus características técnicas, cuantas cámaras se pondrán y dónde, y qué se harán con las imágenes. La directora de la APDCAT, Esther Mitjans, destaca que la memoria es una forma de valorar la "proporcionalidad" de instalar el sistema para que sólo se haga "en caso necesario", aumentando su carácter preventivo.

También se recuerda que todas las empresas que captan imágenes deben informar con carteles de la colocación de estas cámaras y que la no señalización puede comportar una queja a la Agencia Española. Mitjans resaltó que la videovigilancia puede crear "expectativas excesivas" ya que debe complementarse con otras medidas de seguridad, y no vulnerar derechos fundamentales de las personas. Por eso, pide que con las nuevas tecnologías se potencie la privacidad de las imágenes, como codificar una grabación, y sólo reproducir trozos que ayuden a solucionar algún delito y bajo control policial. El futuro del control de la videovigilancia puede estar en las nuevas tecnologías, que también es la culpable de que entre en empresas, comercios, portales, escuelas y viviendas sin ninguna regulación.

Los piratas llegan casi a La India

Dos meses después de la liberación del «Alakrana», los atuneros siguen trabajando en el Índico más tranquilos porque llevan protección a bordo, pero sin bajar nunca la guardia

Autor: Espe Abuín
Fecha de publicación: 17/1/2010

Hace justo dos meses, el Alakrana recobraba la libertad. Los dos últimos de los más de 60 piratas que participaron en el secuestro del atunero vasco abandonaban el pesquero, que ponía proa a las islas Seychelles tras pasar 47 días retenido en poder de los delincuentes. El jueves pasado la embarcación trabajaba en ese mismo océano que durante dos meses se convirtió en su cárcel. Faena en aguas próximas a las islas Chagos, casi más cerca de La India que de Somalia, pero allí la pesca no se les está dando bien. «Empezamos mal y luego es muy difícil remontar», comentó el baionés Agustín Freire, capitán del Alakrana. Y, además, ni siquiera en ese rincón del Índico están a salvo. Ha habido avistamientos de esquifes y buques nodrizas incluso allí, más al este del paralelo 70, en mitad de la nada acuática.



Los vigilantes fueron formados en Cartagena antes de ir al Índico

La tropa que capitanea ahora Freire navega un poco más tranquila ahora que lleva a bordo agentes de seguridad privada para ocuparse de su protección, pero ni así las tienen todas consigo. Aunque ha disminuido la tensión y ya hace semanas que no se oye de un intento de asalto a un pesquero, lo cierto es que «ahora mismo el Índico es más peligroso que en otras épocas del año». Lo dice Marcos Nine, boirense de Comoxo que capitanea el Campolibre Alai, de la misma empresa armadora que el Alakrana, Echevastar Fleet. Nine no estaba a bordo el 7 de septiembre pasado, cuando el atunero fue perseguido por un esquife de piratas, pero sabe que no está libre y que cualquier día podría tocarle a él. No en vano «casi cada día llegan avisos de avistamientos» y, además, «el clima ahora facilita las cosas» a los piratas.

Ahora bien, el capitán del Campolibre Alai no oculta que navegan más tranquilos «porque hay a bordo tres agentes de seguridad y hacemos guardias de 24 horas», pero sin rebajar nunca la atención. Sobre todo porque el atunero «corre muy poco». Es gracias a que hay vigilantes privados que se atreven a ir a buscar los objetos cerca de Somalia. «Si no hubiera personal armado a bordo, ni se nos ocurriría acercarnos a por ellos», dice Nine.

«No hay lugar seguro»

En el puente del Albacora Cuatro, el único atunero con base en Galicia estaba el viernes el bermeano Jesús Antonio Apraiz, su patrón de pesca. Apraiz cree que, en comparación con unos meses atrás, la situación está «un poco más calmada», pero «nunca se sabe donde está la sorpresa» y por eso «todos los días mantienen la misma precaución y trabajan sin bajar la guardia». Hasta ahora, no han tenido que activar el protocolo de emergencia, pero sí han llevado «algún susto» que, finalmente, resultaron ser «falsas alarmas».

Sección Sindical **SEGURIDAD PRIVADA**

También en el Albacora Cuatro están en alerta las 24 horas del día: «La cuestión es que no te pillen desprevenido». Porque, eso sí, en el Índico ya no hay lugar seguro. «Lo llevamos diciendo mucho tiempo, da igual que estemos cerca o lejos de Somalia; el pirata no tiene límites, no entiende de aguas jurisdiccionales o internacionales, más que no entender, es que le da igual». De hecho, recuerda que los últimos avistamientos han sido en los alrededores de Chagos.

A bordo del Intertuna Dos, su capitán explica secamente que sí se han reducido los ataques, pero rechaza hacer más comentarios al respecto y aún menos decir dónde están faenando o si les va bien la marea o no. Esa es una constante en casi todos los atuneros. «Es que si decimos que nos está yendo bien, esta zona se va a llenar de barcos y entonces ya no se nos va a dar tan bien la cosa», argumenta uno de los patrones del Índico.

La empresa de seguridad de los atuneros españoles desmiente problemas con sus vigilantes

Algunos de los agentes se quejan de que el material no es el adecuado

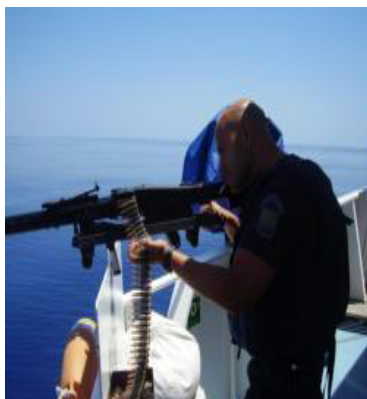
El secuestro del atunero español 'Alakrana' en octubre de 2009 precipitó la decisión del Gobierno de autorizar que los navíos lleven seguridad privada al Índico. Así, en noviembre 70 vigilantes privados se prepararon para proteger a los atuneros españoles, pero sólo dos meses después han surgido los primeros problemas.

Hace unos días el portavoz de la Asociación de Escoltas en Activo en el País Vasco, Santiago González, aseguraba que un número "importante" de los 54 vigilantes privados que protegen a los pesqueros españoles en Somalia han pedido la cuenta en sus empresas y regresarán a España al encontrarse con una situación que "no era la esperada". Una de sus principales quejas es que el material que utilizan no es el adecuado y que tampoco lo son las armas que usan.

Desde la empresa encargada de proporcionar los escoltas a los atuneros niegan que exista ningún problema con los agentes embarcados en Somalia.

Afirman que sólo seis de los 70 vigilantes de seguridad destinados a este servicio no han superado el periodo de prueba establecido en sus contratos, y por ello fueron rescindidos, y que únicamente cuatro trabajadores han solicitado por causas personales abandonar el destino y volver a su anterior puesto.

Sobre el armamento que manejan, Segur Ibérica dice que es el autorizado por el Gobierno y del calibre suficiente para repeler las posibles agresiones de los piratas somalíes.



Los agentes embarcados a bordo respondieron con fuego de ametralladora y fusil.

Los 54 vigilantes españoles tenían instrucciones precisas por parte de la empresa que les reclutó. «Nada más aterrizar en Seychelles -explica Ismael- nos dijeron: ante cualquier ataque, disparad, hundid el barco y luego ponéis en el parte: Sin novedad». Concluido el primer relevo de dos meses, la empresa rescindió el contrato de Ismael y otros cinco compañeros, alegando que no han superado el periodo de prueba.

El Gobierno todavía no ha pagado la seguridad privada de los atuneros

Los armadores abonan su parte «religiosamente», pero advierten que los problemas se deben a un «proceso de selección realizado muy deprisa».

PALOMA CERVILLA | MADRID
Miércoles, 20-01-10

Los armadores de los barcos atuneros que faenan en Somalia ya lo habían advertido y el tiempo parece darles la razón. Pidieron que el Gobierno embarcara infantes de Marina en los barcos para evitar ataques de los piratas y el Ejecutivo sólo les ofreció una seguridad privada que, a la vista de lo sucedido la semana pasada, no está a la altura de las circunstancias.

Pero esto no es lo peor, sino que tres meses después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, se comprometiera en el Congreso de los Diputados a financiar un 25 por ciento del coste de esta seguridad privada, todavía no se ha desembolsado ni un sólo euro. Y los problemas no se quedan ahí, ya que, como avanzó ABC el pasado 20 de diciembre, las armas de gran calibre, unas ametralladoras del calibre 12,70, no pueden entrar en las islas Seychelles, al impedirlo las autoridades.

Problemas

Dos meses después de que unos cien vigilantes de seguridad privada emprendieran su traslado a las islas Seychelles, donde los barcos atuneros tienen su base, han salido a relucir todos estos problemas. La espita de las críticas la ha abierto un grupo de estos vigilantes, que han regresado a España al no superar el periodo de pruebas.

Los armadores consultados por ABC reconocen que ha habido problemas con algunos de ellos, debido a situaciones de

«Disparad y poned en el parte: Sin novedad»

M. A. RUIZ COLL | ALICANTE
Miércoles, 20-01-10

El alicantino Ismael Nettah pidió una excedencia en la empresa de seguridad en la que trabaja para embarcarse como vigilante en el atunero «Txori Gorri», atraído por la posibilidad de vivir una nueva experiencia y por el salario prometido: 5.000 euros brutos al mes.

ABC El alicantino Ismael Nettah, a bordo del atunero vasco «Txori Gorri» frente a las costas de Somalia

Apenas una semana después de subir a bordo, tuvo su primer contacto con los piratas. «Sobre las nueve de la mañana, avistamos un buque nodriza del que descendieron dos esquifes», relata. «Nos siguieron durante 20 minutos, pero luego abandonaron la persecución, porque hubieran tardado más de dos horas en alcanzarnos».

Desde que, el pasado 13 de noviembre, se inició la operación para proteger a los atuneros españoles en aguas de Somalia, los vigilantes de seguridad sólo han tenido que abrir fuego una vez. El 29 de noviembre, el «Ortube Berria» fue atacado con un lanzagranadas desde dos esquifes.

estrés y problemas familiares, y quitan importancia a la polvareda que han levantado otros, según su testimonio. Sin embargo, sí advierten que estos problemas son consecuencia de una «selección de personal que se hizo muy deprisa». De hecho, ellos sólo aceptaron la oferta del Gobierno como mal menor y como única salida a una situación insostenible, ya que los tripulantes se habían negado a salir a faenar mientras continuara la ofensiva de los piratas. «Nosotros solicitamos infantes de Marina porque son auténticos profesionales», recuerdan.

Pero mientras algunos vigilantes de seguridad denuncian la situación en la que se encuentran, los armadores cumplen «religiosamente» con lo que se comprometieron y pagan este servicio. Sin embargo, el Gobierno no hace lo mismo. A fecha de hoy, el Ejecutivo todavía no ha dicho cómo pagará el 25 por ciento del coste, al que se comprometió. Pero es que tampoco se reúne con el sector para ofrecerle una solución a un compromiso que, posiblemente, no pueda cumplir.

El problema de las armas no es baladí. El Ejecutivo, en su afán por frenar las críticas del sector, llegó a cambiar la legislación para que la seguridad privada pudiera utilizar armas de guerra, pero se olvidó un detalle, que antes tenía que contar con la autorización de las islas Seychelles.

Valencia. Adjudican por 112.000 € la seguridad de la exposición "La gloria del Barroco"

Según publica hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el importe de adjudicación ha sido finalmente 28.137 euros más barato que el presupuesto base de licitación, y la empresa que ejecutará este servicio es Sabico Seguridad, SA.

La tramitación de este contrato se ha hecho de forma ordinaria y mediante procedimiento abierto, habiéndose primado la oferta económicamente más ventajosa en función de una pluralidad de criterios.

El pasado 15 de diciembre se abrió al público la octava exposición de La Luz de las Imágenes, que durante su primer mes ha recibido a un total de 18.013 visitantes que han recorrido el Almudín y las iglesias de San Esteban, San Martín y San Juan de la Cruz, las cuatro sedes de esta muestra de la ciudad de Valencia.

Esta exposición se presenta como un homenaje a las manifestaciones artísticas barrocas generadas en la Comunitat Valenciana, como el estilo artístico más

representativo de la historia valenciana, y el que mejor define el carácter mediterráneo de sus habitantes. EFE

Carlos Bañuelos. Presidente de APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad).

«La prioridad ahora y para 2010 es mantener los puestos de trabajo del sector»



Foto: APROSER

¿Cómo cree que está afectando la actual crisis económica al sector de la seguridad privada en general? ¿Y de una manera más concreta al que usted representa?

-El sector de la seguridad privada va acorde con la coyuntura económica del país, por lo tanto, cuando la economía nacional sufre bajadas tales como las actuales, también se resiente la dinámica del sector. En la situación actual de crisis, muchos de los apartados que componen la actividad de la seguridad privada están teniendo serios problemas, como consecuencia de los muchos factores negativos que configuran actualmente el panorama económico español. Esto se está notando incluso en el segmento de la instalación de sistemas de alarmas, que había mostrado en ejercicios económicos anteriores resultados de crecimiento muy positivos.

Los datos de APROSER, asociación empresarial representativa del 75 por 100 de los servicios de seguridad privada en España, reflejan que desde mediados del año 2008 la demanda de servicios de seguridad privada ha experimentado una caída, continuada y sostenida, que se ha acentuado a lo largo de todo lo que llevamos de 2009.

Esto se puede apreciar en la evolución de las cifras de los primeros trimestres de 2009 para el apartado de vigilancia, que supone la actividad de mayor facturación y demanda. Frente a los ritmos de crecimiento positivo de cuatro puntos en el primer trimestre de 2008 en relación con el

mismo periodo de 2007, las cifras del primer trimestre de 2009 permiten constatar una disminución de más de tres puntos en relación con el primer trimestre del año anterior, a lo que se une la caída de las contrataciones en el segundo trimestre del año, de cerca de un 5 por 100 en relación con el año anterior. El tercer trimestre del 2009 sigue presentando cifras negativas en lo referido a la evolución de la demanda de servicios, que se sitúa con un 3,70 por 100 negativo.

-Cada dos años tiene lugar la celebración del Salón Internacional de la Seguridad, ¿qué cree que aporta esta feria al sector de la Seguridad en general, en estos momentos de crisis?

-La Feria Internacional de la Seguridad, Vigilancia y Prevención se ha consolidado como uno de los encuentros profesionales más destacados del calendario europeo y un completo referente capaz de aglutinar todas las áreas que configuran el sector de la seguridad integral. Sicur reúne a los baluartes del sector con un enfoque integral, reforzando la protección de bienes y personas, la prevención rápida e intervención en casos de emergencia, por lo que su aportación al conjunto de la seguridad privada siempre es muy positiva. Pero en realidad quienes debían contestarle a esto son los propios organizadores de Sicur.

-¿Qué objetivos, proyectos y planes tiene previsto llevar a cabo la asociación durante el año 2010?

-Sin ninguna duda el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector. Pese a que en los últimos años el sector de la seguridad privada venía manifestando un importante déficit de personal, desde finales de 2008 y, especialmente, con la llegada de los primeros trimestres de 2009, la situación laboral se presenta radicalmente distinta. La disminución que se ha producido en este periodo en la demanda de servicios, junto con el incremento de candidatos para incorporarse al sector y la vuelta de trabajadores empleados en otras áreas han hecho que en estos momentos exista un número suficiente de trabajadores debidamente cualificados para cubrir las necesidades de personal de las empresas de seguridad privada. Por esa razón, uno de los principales retos inmediatos del sector radica en mantener y salvaguardar los puestos de trabajo de los cerca de 86.000 profesionales empleados en la actualidad.

Por otro lado, pese a que los resultados cualitativos del último informe sociológico de APROSER indican que siete de cada diez encuestados tienen una opinión muy

positiva de la labor que desempeñan los vigilantes de seguridad, uno de los principales proyectos del sector es afianzar el reconocimiento de la labor profesional de seguridad y protección de los mismos.

Por último, aunque la Ley de Seguridad Privada, que data del año 1992, es un instrumento que globalmente puede valorarse muy positivamente, sería preciso abordar una reforma parcial en aquellos aspectos relativos a las funciones que pueden acometerse por parte de las empresas de seguridad privada en la protección jurídica del vigilante o en la reducción de los requisitos burocráticos del proceso de habilitación. Para el sector es fundamental que el proceso de habilitación siga correspondiendo a una norma de aplicación para el conjunto del Estado, toda vez que la eventual ruptura de la unidad de mercado podría dificultar la tarea de nuestras compañías.

-¿Cómo han cambiado las necesidades y demandas de seguridad de la sociedad en los últimos años?

-A excepción de la situación actual, a consecuencia de las dificultades económicas de la crisis, en los años anteriores, de 2002 a 2007, la demanda de servicios mantuvo un ritmo de crecimiento muy positivo en cuanto a las cifras de facturación. El crecimiento se situó en el 37 por 100, lo que representa un factor al alza permanente y sostenido propio de un sector consolidado. Sin embargo, las cifras de actividad del segundo semestre de 2008 y, muy especialmente, de los primeros trimestres del año 2009 presentan una realidad totalmente distinta. Dado que prestamos nuestros servicios al tejido económico del país, como refleja nuestro informe económico (sector industrial, comercio o infraestructuras de transporte, entre otros), un cierre de una fábrica o una disminución de la actividad en un centro comercial repercute directamente en los servicios requeridos a nuestras empresas.

-¿Qué papel cree que ha jugado la tecnología en las labores que desempeñan los diferentes profesionales de la seguridad?

-Detrás del trabajo de casi la totalidad de las áreas de seguridad privada, existe un importante soporte tecnológico, de comunicaciones e informático, con programas propios desarrollados para dar respuesta a las distintas necesidades de cada cliente. La adaptación tecnológica del sector ha caminado a la par que la sociedad, creciendo y evolucionando desde su implantación y en la actualidad se configura como un elemento indispensable en nuestra actividad.

El papel de la tecnología es crucial tanto en los casos de los sistemas de seguridad basados en la instalación y mantenimiento de alarmas, como en el caso de la vigilancia, entre otros, ya que complementa y amplifica las labores de protección y atención que ejercen los profesionales del sector.

Cádiz. Los médicos salen a la calle para pedir más seguridad en las consultas

Los profesionales critican que la mayor parte de ambulatorios carecen de timbres de emergencia o vigilancia privada 20.01.10 - 02:50 - JESÚS ARAGÓN

Los médicos se sienten indefensos. El último episodio de agresión a un facultativo en el centro de salud Padre Salado de La Banda ha hecho saltar la voz de alarma entre los profesionales sanitarios. Ésta fue la última de una tanda de cuatro episodios en sólo veinte días, una situación cuanto menos preocupante.

En la mañana de ayer una nutrida representación de sindicatos y corporaciones médicas de Cádiz, a las que se sumó el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia, Miguel Morgado, realizó una concentración a las puertas del ambulatorio donde ocurrieron los hechos. Pocas veces se había visto tanto apoyo y es a través de la unión de fuerzas con lo que la profesión quiere hacer frente a esta lacra.

Más seguridad

En las consignas que corearon reclamaron más seguridad en el trabajo. A pesar del rosario de casos que se han producido en los últimos años, aún hay muchos centros de salud que no cuentan con agentes de seguridad privada, cámaras de vigilancia ni con timbres antipánico. Ése es el caso del centro chiclanero donde se produjo el último caso.

Sindicatos y colegios profesionales coinciden en que la falta de personal y la consiguiente presión asistencial les perjudica. A su parecer, el paciente descarga la frustración contra quienes trabajan en los centros sanitarios públicos. Desde el SAS siempre han defendido que «no se puede justificar ninguna agresión con la falta de personal ni de recursos». Sólo durante el año pasado se produjeron casi 300 casos de agresiones verbales y físicas, pero apenas se denuncia un 10% de ellas.

Tenerife. Los agentes de seguridad del aeropuerto, en precario

Empleados de la adjudicataria anterior piden la subrogación en la nueva empresa.

TERESA NICOLÁS | GRANADILLA DE ABONA

Desde el pasado 31 de diciembre, los trabajadores de la seguridad privada del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía viven en constante incertidumbre laboral, a causa de la adjudicación del servicio, por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), a la empresa Vinsa Seguridad que, según los representantes de los trabajadores, Alternativa Sindical, "ha procedido al despido encubierto, sin liquidación, de unos nueve trabajadores, pese a que se pactó con la adjudicataria saliente, Seguridad Integral Canaria, la subrogación de los 152 trabajadores que conformaban la anterior plantilla, en algunos casos con una antigüedad entre dos y cinco años", apuntó ayer la coordinadora delegada provincial de Alternativa Sindical, Mónica González.

Ante esa situación, los representantes sindicales solicitarán el día 27 de enero que se celebrará el acto de conciliación en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (Semac), la readmisión de todos los trabajadores y en su defecto el despido con indemnización de 45 días por año trabajado, tal como marca la ley, apuntaron ayer los representantes de Alternativa Sindical.

Hasta la celebración del acto de conciliación, los empleados de seguridad realizan concentraciones en la terminal del Reina Sofía para recoger firmas de apoyo en su causa, y si a partir de ese día no hay acuerdo, Alternativa Sindical ha anunciado movilizaciones, como manifestaciones y huelga de hambre.

Un servicio prestado a demanda

Alternativa Sindical ha manifestado que la seguridad privada en el Reina Sofía no puede estar a demanda de la cantidad o número de pasajeros, ya que ello va en perjuicio de la calidad del servicio que debe prestarse. Según los representantes de los trabajadores, tal situación es la que se está dando en la actualidad con la nueva adjudicataria del servicio, por lo que así sólo se consigue que la seguridad "merme" en calidad, ya que al reducirse las plantillas, no hay tiempo para formación. En ese sentido, los empleados resaltan que la seguridad que se presta acaba siendo precaria, ya que se limita al control

exclusivo de pasajeros mediante scanner y poco más, quedando al descubierto otros elementos de control al objeto de garantizar una seguridad integral en todo el recinto aeroportuario. Con el fin de evitar que situaciones de este tipo acaben siendo la tónica general de las empresas dedicadas a este sector, los empleados en seguridad exigen el cumplimiento de unos requisitos mínimos por parte de las empresas hacia sus trabajadores, requisitos que pasan por la estabilidad laboral, con horarios adecuados y tiempo para formación.

Sevilla. Muere el vigilante que recibió una paliza en la planta fotovoltaica

José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años, fallece casi dos meses después de ser agredido brutalmente en Marchena por una banda de delincuentes del Este

Fernando Pérez Ávila | Actualizado 21.01.2010 - 18:54



José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años.

El vigilante de seguridad que fue brutalmente agredido por una banda de delincuentes en la planta fotovoltaica de Marchena el pasado 25 de noviembre murió este martes en el Hospital Virgen del Rocío, donde pasó los dos últimos meses de su vida tratando de recuperarse de la gravedad de sus heridas. El vigilante, José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años, fue enterrado ayer por la tarde en el cementerio municipal de Camas, la localidad en la que residía, después de un funeral celebrado en la parroquia Nuestra Señora de la Fuente.

Jiménez Ceferino, empleado de las empresas Omega y Seguridad Uniformada S. L., fue asaltado por un grupo de delincuentes que irrumpió de madrugada en la planta fotovoltaica para robar cables de cobre. El vigilante se encontraba solo en las instalaciones, situadas a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Marchena, y recibió una brutal paliza que ha terminado costándole la vida. Los asaltantes le golpearon con una dureza

extrema hasta el punto que llegaron a clavarle un punzón en el ojo. Esta herida hizo que posteriormente desarrollara un absceso o infección en el cerebro. Además, el trabajador sufrió fractura de cúbito y radio, fractura de la órbita ocular y un traumatismo craneoencefálico como consecuencia de los numerosos golpes recibidos.

Los delincuentes dejaron al vigilante malherido y esposado con sus propios grilletas en la planta fotovoltaica, donde fue encontrado a primera hora de la mañana. Posiblemente creyeron que estaba muerto y se llevaron su teléfono móvil y su coche, que apareció quemado en un paraje cercano.

La Guardia Civil continúa buscando a los agresores y cree que se trata de una banda de delincuentes de Europa del Este, posiblemente de Rumania. A los investigadores llegó incluso a sorprenderles la brutalidad empleada por los asaltantes, que se enfrentaron a un hombre desarmado. La asociación Vigías informó ayer de que la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Sevilla le concederá al vigilante, a título póstumo, la mención honorífica de tipo A por "poner su integridad física en peligro en beneficio de los ciudadanos y los bienes bajo su custodia".

El sepelio de Jiménez Ceferino congregó a numerosos vecinos de Camas y a muchos compañeros del sector. La noticia de su muerte ha abierto el debate sobre las irregularidades existentes en la seguridad privada, sobre todo en materia de contratación y en la dotación de armas al personal.

CCOO acusó a la Subdelegación del Gobierno de no facilitar armas de fuego a los vigilantes para servicios como el que prestaba Jiménez Ceferino. "Se encontraba solo y con unos grilletas y una defensa como únicos elementos de protección", dijo la secretaria de Actividades Diversas de CCOO, Mercedes Santoja. El Sindicato de Trabajadores de Seguridad también denunció la paradoja que sufre el sector. "Es la inseguridad de la seguridad", expuso Antonio Fernández, representante de este sindicato.

Cantabria. El SCS ordena el traslado de la sangre de Laredo a Mompía

Ante la tensión vivida con los sindicalistas, las 370 muestras tuvieron que ser custodiadas por un vigilante 21.01.10 - 00:30 -

RAFAEL SÁNCHEZ | LAREDO.

El SCS ordenó ayer el envío de unas 370 muestras de sangre procedentes del Hospital Comarcal de Laredo y de los ocho centros de salud de su área de influencia hasta los laboratorios del Hospital de Mompía (centro privado situado en Santa Cruz de Bezana) para que fueran procesadas allí. Esta estrategia fue ideada por el gerente del Hospital de Laredo para evitar que se unieran a las centenares de ellas que se han perdido durante el desarrollo de la huelga.

El traslado se debió al seguimiento del paro en un 100 % de los técnicos, con sólo dos trabajadores en Laboratorio en servicios mínimos para procesar muestras de urgencias. El resto, diez, secundaron el paro. Lo mismo sucedió en Radiología, con dos técnicos trabajando y nueve en huelga.

El traslado de las muestras fue el colofón a una tensa espera de horas, más propia del guión de una película de acción que de una huelga. Tal y como estaba previsto, a primera hora, 08.30, comenzaron las extracciones en el hospital que se trasladaron con normalidad al laboratorio, donde, paralelamente, se les unieron las del resto de los ocho centros de salud de la comarca.

Hasta ahí, todo bien, aparentemente, incluso con una orden directa del Servicio Cántabro del Salud (SCS) al jefe de sección «de que tenían que ser procesadas todas las unidades». Pero no fue así.

Momentos de tensión

Con el paso de las horas, la tensión fue subiendo hasta que, poco antes de la finalización del servicio, a las 15.00 horas, llegó la orden del traslado de la sangre a otro lugar, a lo que los sindicatos se negaron rotundamente.

Tras sopesar la posibilidad de requerir la presencia de un notario, los delegados exigieron que se diera la orden del traslado por escrito. Una vez redactada y entregada al jefe de servicio, con ordenes directas de la gerencia del SCS, permitió la salida del material, nueve maletines con la sangre, aunque sin indicar su destino. Para evitar problemas, dado el ambiente, **las muestras fueron custodiadas por un vigilante de seguridad en su trayecto** desde el laboratorio hasta el vehículo que trasladó los maletines hasta Mompía.

Un portavoz sindical anunció la presentación de una demanda por entender que la orden conculcaba lo reglamentado en estas situaciones huelga. «Esta prohibido minimizar los efectos de la misma con el auxilio de empresas externas al conflicto», señalaron.

Sección Sindical **SEGURIDAD PRIVADA**

En Radiología se suspendieron 80 pruebas, de ellas 10 mamografías. Además, como adelantó ayer este periódico, la huelga de celadores provocó que al no poderse trasladar unas 600 historiales a las consultas programadas se tuvieran que suspender muchas de ellas y enviar a los pacientes a casa con el consiguiente enfado por no haber sido avisados.

A pesar de lo dicho sobre el sistema a emplear para que no se deterioren la sangre, en absoluto se resuelve el problema con su refrigeración, como apuntó el consejero de Sanidad. Ayer, fuentes próximas al Laboratorio de éste centro aseguraban que muchas de las muestras llevadas a Mompía «se podrían haber perdido por el retraso en ser procesadas».

Según técnicos privados consultados por EL DIARIO MONTANÉS para establecer el tiempo que puede durar una muestra sin procesar, hay que distinguir entre las pruebas a las que se somete la sangre extraída. Las destinadas a bioquímica y serología (glucosa, colesterol y otras), necesitan ser centrifugadas en un breve espacio de tiempo «para separar la parte sólida del suero». Una vez verificada la operación, el suero se puede procesar inmediatamente o, en su defecto, ser congelado para días posteriores. Sin embargo, el sistema dentro de la especialidad de hematología (estudio de los elementos de la sangre y sus precursores, así como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos), es diferente. Al no tener que centrifugarse, puede durar más tiempo.

Rubalcaba y Napolitano debaten la necesidad de usar el escáner corporal

Rubalcaba se ha reunido con sus homólogos de Estados Unidos y Francia.
* Europa quiere contar con EEUU como aliado en seguridad aeroportuaria.
* Los Ministros de Interior de la UE analizarán las nuevas amenazas terroristas.
* Fronteras fuertes y coordinadas, apuesta española para controlar la inmigración.



Rubalcaba se ha reunido en Toledo con la Secretaria de Seguridad estadounidense, Janet Napolitano, para abordar la estrategia conjunta de seguridad aeroportuaria entre Europa y Estados Unidos.

ARTURO CRIADO - TOLEDO 21.01.2010
- 11:20h

Ya está aquí. Europa y Estados Unidos se sientan a esta hora en Toledo en la misma mesa para hablar de seguridad aeroportuaria. En el fondo del asunto, entre otras medidas, el uso del escáner corporal.

Una medida polémica sobre el que la presidencia española quiere "tomar la temperatura" de los socios, según el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El debate se enmarca en la reunión de ministros de Interior y Justicia, en el que se abordan dos grandes temáticas: Estrategia de Seguridad Común, y la lucha contra el Terrorismo Internacional e Islamista. Nuevo terrorismo, nuevas formas de combatirlo

En este último aspecto es en el que se enmarca la seguridad en los aeropuertos. El terrorismo se moderniza, y también deben hacerlo las medidas de seguridad que se toman para evitar atentados.

Por eso, Europa quiere contar con Estados Unidos. Se trata de "tomar medidas globales ante un problema global". Y para ello está aquí presente la secretaria de Seguridad estadounidense, Janet Napolitano.

Antes del encuentro, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, se ha entrevistado con Napolitano para preparar la reunión y constatar que ambas partes quieren "avanzar urgentemente para asegurar que la seguridad aeroportuaria sigue mejorando", como decía en una entrevista a Reuterse la estadounidense.

No sólo este aspecto ha estado sobre la mesa. Fuentes de Interior hablan de que el intercambio de los datos de los pasajeros también ha salido a relucir.

Ahora, los 27 analizan con Napolitano la posibilidad avanzar en la cooperación judicial e internacional. Además, se estudiarán los posible fallos que se cometieron durante el frustrado atentado de Detroit.

Estrategia de seguridad común

La gran ambición de España para este semestre radica en lograr la "Estrategia de

Seguridad Común". Una especie de "paraguas que marque las líneas estratégicas" que deben seguirse, según el secretario de Estado de Seguridad.

De lo que se trata es de conseguir que se pueda trabajar "de forma coordinada en los límites de la Unión Europea". Para ello ha establecido la necesidad de contar con todos los agentes implicados en garantizar la seguridad de los ciudadanos: gobiernos, sociedad civil y responsables de seguridad privada.

Desarrollar esta estrategia es el gran reto al que se enfrenta la presidencia española. Un tema que ha abordado a primera hora de la mañana, y durante 20 minutos, Rubalcaba con su homólogo francés, Brice Hortefeux.

Ambos han hablado de colaboración europea, y también del estado en el que se encuentra la lucha contra ETA, así como de las últimas operaciones antiterroristas que se han producido. Impulsar la política común de inmigración

Otro reto de esta reunión es impulsar una estrategia comunitaria en materia de inmigración, estableciendo unas fronteras "fuertes y bien coordinadas entre todos los países".

Palabras del Ministro de Inmigración, Celestino Corbacho, que ve necesarias tres líneas de actuación: "reforzar los controles de entrada a Europa", "aumentar las políticas de integración" e "implicar a los países de origen" en la estrategia europea.

Todo ello teniendo en cuenta que Europa necesita la inmigración, pero legal. Sobre todo teniendo en cuenta que de cara a 2030 los 27 serán el continente más envejecido del planeta.

A buen seguro, que también estará presente la carta enviada por París y Atenas para reclamar a la presidencia más control de las fronteras exteriores.

Por último, los ministros de Inmigración abordarán también la problemática de los menores no acompañados, y la "necesidad de compartir los gastos", según la secretaria de estado, Consuelo Rumí, que genera su repatriación y acogida. La protección a las víctimas

Será el viernes por la mañana cuando los ministros de Justicia se reúnan en Toledo. En ese encuentro abordarán tres grandes cuestiones: por un lado la orden europea de protección a las víctimas, por otro las normativas de separación y divorcio en los matrimonios binacionales, y finalmente

Sección Sindical **SEGURIDAD PRIVADA**

estudiarán los cambios normativos del Tratado de Lisboa.

Intentarán, en definitiva, conseguir que poco a poco Europa se vaya convirtiendo en la "Europa de los Derechos", según el secretario de estado de Justicia, Juan Carlos Campo.

Detenido en Bilbao tras agredir a un vigilante de seguridad cuando robaba varios pares de zapatos en un comercio

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años de edad fue detenido ayer en Bilbao tras agredir a un vigilante de seguridad cuando robaba varios pares de zapatos en un comercio de la capital vizcaína, según informó la Ertzaintza en un comunicado.

Los hechos sucedieron alrededor de la una menos cuarto de la tarde cuando la Policía vasca fue informada de que, en un establecimiento comercial ubicado en el centro de la capital vizcaína, tenían retenido a un individuo al que habían sorprendido robando.

El sospechoso fue visto introduciendo varios pares de zapatos en una bolsa preparada para eludir los sensores de alarma y, al verse sorprendido a la salida, había comenzado a golpear al vigilante. Finalmente, tras un forcejeo se había podido interceptar su huida.

Según confirmó el personal de la tienda, en el momento del robo, éste se encontraba acompañado de otro individuo que se dio a la fuga sin poder ser retenido.

Los ertzainas procedieron a identificar al joven, comprobando que se encontraba indocumentado y fue detenido acusado de un delito de robo con violencia. El arrestado fue después trasladado a dependencias policiales.

Rubalcaba quiere retirar la escolta a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional

Los recortes presupuestarios del Ministerio del Interior empiezan a hacerse patentes. Según cuenta La Gaceta, Rubalcaba estudia retirar la escolta a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Los magistrados consideran esta medida como oportunista y que no ahorraría los gastos que sugiere Interior.

2010-01-21 libertad digital

El Ministerio del Interior necesita reducir costes y para ello siempre ha optado por

conseguir ese recorte por el mismo sitio: con los agentes y la seguridad. Primero ha sido la falta de material básico de guardias civiles y policías, que se han quejado amargamente sin éxito en innumerables ocasiones. Y ahora, Pérez Rubalcaba estudia quitar la escolta a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Ya se hizo un intento de este tipo en el País Vasco.

El titular de Interior está reorganizando el sistema de seguridad de ciertas personalidades para reubicar a esos agentes en otros destinos. Según La Gaceta, aún no se han determinado que magistrados y fiscales se quedarían sin protección.

Hasta el momento, lo único que parece claro es que esta iniciativa de Interior no afectará a los seis jueces centrales de Instrucción, entre los que se encuentran Garzón, Pedraz y Grande Marlaska. Y en principio tampoco deberían quedarse sin escolta los presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, aunque aún se está estudiando.

Los magistrados y fiscales viven con resignación las maniobras de Rubalcaba y han señalado que algunos de ellos han sido objetivos de grupos terroristas, mafias y delincuentes. Además, han considerado que esta iniciativa no es eficaz a la hora de reducir costes, sino que debe responder a otros motivos, puesto que los jueces de este órgano rondan los treinta.

Valencia. CSIF impulsa su crecimiento con la inauguración de su nueva sede autonómica y provincial

El sindicato CSI-F ha inaugurado su nueva sede autonómica y provincial, ubicada en el número 11 de la calle Gibraltar de Valencia. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, compartieron la presidencia del acto con el máximo responsable nacional de CSI-F, Domingo Fernández, el Presidente Autonómico, Daniel Matoses y el Consejo Sindical Nacional formado por los representantes de todas las provincias, Autonomías y Sectores Nacionales.

El evento comenzó alrededor de las doce con una visita institucional del edificio en el que también participaron la consellera portavoz, de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León; el conseller de Sanidad, Manuel Cervera; y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano; además de diversos concejales del Ayuntamiento de Valencia y diferentes secretarías autonómicas y directores generales.

Tras el recorrido entraron en el abarrotado salón de actos para proceder a la entrega de las placas de sindicalistas de honor de CSI-F, Comunidad Valenciana, al presidente del Colegio de Médicos, Vicente Alapont; al concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver; el secretario autonómico de Gobernación, Luis Ibáñez; y el secretario autonómico de Administraciones Públicas, Rafael Peset. En nombre de ellos intervino Alapont, que agradeció la distinción y recordó sus 20 años de afiliación en el sindicato.

Después de la proyección de un vídeo ilustrativo que mostraba la paralela evolución de la Comunidad Valenciana y del sindicato CSI-F, que cuenta con 14 sedes en toda la autonomía incluyendo la inaugurada, comenzaron las intervenciones.

El presidente autonómico de CSI-F, Daniel Matoses, destacó que el nuevo local "ha sido posible gracias al esfuerzo de los 17.000 afiliados que tiene el sindicato", y recordó la tenacidad de antecesores suyos al frente de la organización, como Alfonso Grau, Francisco González, José María Arpón, Enrique Arrufat o María Dolores Segura".

Recalcó que "las sedes forman parte del patrimonio del sindicato" y agradeció al respecto la confianza del Gobierno valenciano y del Banco Popular al conceder el préstamo que ha hecho posible la adquisición del solar y la construcción del inmueble, cuyo montante total ha rondado los siete millones de euros. Sentenció que el próximo reto de CSI-F consiste en convertirlo en "el único referente del sindicalismo independiente en España".

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, subrayó el carácter de CSI-F como "referente del sindicalismo en España por su constante capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos para salir de la crisis". Además de destacar "el pedazo de nueva sede", instó al sindicato a "ser capaz de seguir prestando los mejores servicios a la Comunidad Valenciana".

Por su parte, el Presidente Nacional de CSI-F, Domingo Fernández, recalcó "el orgullo que supone inaugurar este nuevo edificio", y la característica especial de esta visita a Valencia porque le permite estar acompañado por todos los presidentes provinciales y autonómicos del sindicato respaldando a los compañeros de Valencia.

Destacó la importancia de este Consejo en el cual, entre otros temas, se denunció la grave situación que atraviesa la

Sección Sindical **SEGURIDAD PRIVADA**

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y las medidas de denuncia y reivindicación que se ponen en marcha desde este momento.

Asimismo se hizo referencia al pronunciamiento de solidaridad con la República de Haití con el acuerdo de la entrega de 100.000 euros a la Cruz Roja española.

Además se aprovechó este acto para hacer entrega de las distinciones anuales del Sindicato que en esta ocasión han recaído en las Uniones Autonómicas de Extremadura y Castilla la Mancha. También se obsequió con una placa al Presidente de Lugo y a la Presidenta de Valencia por la apertura de la nueva sede.

En el apartado de homenajes personales, señalar la distinción que tuvo que el anterior Presidente de la Unión Provincial de Granada, así como la entrega de la medalla de CSIF que recibió el Presidente Autonómico de Valencia, Daniel Matoses.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cerró el acto. Recalcó que "llenáis de satisfacción el oído y el alma con vuestro cariño cada vez que acudo al sindicato", y destacó que "estrenar casa siempre produce una enorme satisfacción porque marca el inicio de una nueva etapa, sobre todo si se ha conseguido con el esfuerzo personal".

Barberá no dudó en proclamar que "creo que existe el sindicalismo del siglo XXI sólo porque existe CSI-F. De lo contrario no tendría motivos para pensarlo, porque otros han abandonado su razón de ser, que consiste en la defensa de los trabajadores, y han primado sus intereses políticos".

Granada. Vigilantes jurado custodiarán los edificios municipales a partir de marzo

P. E.

El Consistorio granadino ha aprobado esta mañana la adjudicación definitiva del contrato de seguridad privada en los edificios municipales, una decisión que han llevado a los tribunales los sindicatos al entender que este servicio es competencia exclusiva de la Policía Local.

La custodia de inmuebles corresponderá a partir de marzo a la empresa Castellana de Seguridad S. A., que ha ganado el concurso con un importe anual de unos 450.000 euros. Según el expediente aprobado hoy por el Ayuntamiento, los vigilantes jurados cobrarán unos 18 euros la hora y los controladores 9,80 euros la hora.

La privatización de la seguridad en los edificios municipales responde a un plan ideado en el área de Protección Ciudadana para intensificar la presencia policial en las calles. Además, el año pasado se instalaron cámaras de vigilancia en algunas dependencias del Ayuntamiento y está pendiente la reorganización de los turnos del cuerpo, que prevé liberar a los efectivos de las oficinas y sustituirlos por agentes en segunda actividad.

Tras la restructuración, la capital contará con una treintena de policías más que en la actualidad, que pasarán de realizar labores de custodia y administrativa a la vigilancia a pie de calle. "La intención es hacer coincidir la entrada en vigor de los nuevos turnos con la seguridad privada en los edificios municipales", ha dicho a este diario el edil del ramo, Eduardo Moral. Esta medida pretende "ahorrar costes a la ciudad y obrar con más efectividad".

Entre las organizaciones que han puesto en manos de la justicia la custodia de inmuebles están CC OO y el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLG). La denuncia se fundamenta en la Ley Orgánica de Fuerzas de seguridad, cuando dice que "los cuerpos de Policía Local deberán proteger a las autoridades de las corporaciones municipales y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones". A su vez, la Ley de Coordinación de las Policías de Andalucía establece que es competencia de los agentes locales la "protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias" públicas, así como garantizar "el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios".

Adjudican por 2 millones la seguridad del Museo de Bellas Artes de Valencia

Según publica hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), la empresa adjudicataria ha sido Provinen Seguridad-Provinen Servicios, quien se encargó en 2005 de la vigilancia de la dársena interior del puerto de Valencia durante la celebración de las prerregatas de la 32 edición de la Copa del América de vela.

La tramitación de este contrato ha sido ordinaria y su procedimiento abierto, mientras que el presupuesto base de licitación fue de 2,2 millones de euros.

Por otra parte, la Conselleria ha adjudicado a la empresa Severiano Gestión, SL el servicio de catalogación de

fondos bibliográficos y archivos de la Biblioteca Valenciana por un importe de 441.000 euros (IVA excluido).

En cuanto a la Agencia Valenciana de Turismo, el DOCV publica hoy sendas adjudicaciones relacionadas con instalaciones para playas de la Comunitat Valenciana.

Xúquer Land, SL será la encargada del suministro e instalación de áreas turístico-deportivas prefabricadas y desmontables por un importe de 722.000 euros, mientras que HPC Ibérica, SA ha sido la adjudicataria del contrato de tramitación urgente para el suministro e instalación de diez redes estructurales en juegos juveniles, prefabricados y desmontables en las playas por 208.000 euros. EFE

El Gobierno vasco tampoco ha abonado aún la seguridad privada de los atuneros

Los armadores reconocen que han existido problemas con algunos vigilantes, pero «han sido casos aislados y estamos contentos»
22.01.10 - 02:23 -IRATXE ASTUI | GERNIKA.

El Gobierno vasco no ha desembolsado todavía cantidad alguna -tal y como se comprometió hace tres meses con las empresas atuneras vascas-, por la contratación de seguridad privada para defender los buques del acoso de los piratas en el Océano Índico. «Este tipo de trámites exigen su tiempo y un proceso para recopilar todos la documentación pertinente», justificaron ayer desde el Departamento de Pesca. Como ya adelantó EL CORREO el pasado miércoles, el Ejecutivo de Zapatero tampoco ha pagado un euro todavía.

Ambas administraciones acordaron el pasado mes de noviembre cofinanciar, junto con los armadores, el costo de los escoltas embarcados. Lakua y Madrid afrontarían un 25% del total cada uno, mientras que las empresas pagarían el 50% restante. De hecho, los armadores ya han abonado las primeras facturas por el servicio.

Tres meses después de que el Ministerio de Defensa español permitiera a las compañías embarcar agentes privados, esta experiencia sin precedentes en la flota atunera nacional presenta todavía aspectos a mejorar. «Ha habido problemas con los vigilantes, pero han sido casos contados que, además, ya se han resuelto con otro nuevo proceso de selección de los profesionales. En general, estamos contentos con el servicio que nos

prestan», aseguró Julio Morón, director-gerente de la Organización Opagac de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Al menos tres buques vascos que faenan en el Índico, -entre ellos el 'Alakrana', que permaneció apresado durante 47 días a manos de una banda de piratas-, se han visto obligados a cambiar sus efectivos de seguridad al poco tiempo de comenzar su primera campaña. «De los cuatro que llevamos a bordo tres han abandonado, antes incluso de que terminaran los cuatro meses de la marea. No se adaptaban a la mar y a estar tanto tiempo fuera de casa. Con los tripulantes se han portado siempre bien, las disputas se daban más entre ellos», manifestaron desde el buque 'Txori Gorri' de Bermeo. Otro de los atuneros que ha tenido que reemplazar parte de sus agentes ha sido el 'Txori Toki'.

Asimismo, algunos vigilantes han denunciado despidos y deficiencias en el equipamiento que les fue asignado, aunque Segur Ibérica, empresa responsable de su selección, asegura que «solo se ha procedido al despido de 6 de las 70 personas contratadas, al no superar el periodo de prueba establecido en sus contratos». Cuatro de los trabajadores solicitaron la baja «por causas personales». Los que no han registrado problema alguno con el personal de seguridad embarcado son los atuneros de empresas vascas que navegan bajo pabellón extranjero y que, por tanto, llevan soldados de fortuna a bordo, en su mayoría ex combatientes británicos. «Estos sí que son profesionales en todos los sentidos», aseguraron desde varias empresas.

Ayer mismo, la Audiencia Nacional aceptó que se personen como acusación particular otros dos marineros del atunero bermeano 'Alakrana' en la causa abierta contra los dos supuestos piratas que participaron en el secuestro -'Abdu Willy' y 'Raagegeseey Adji Haman'-. De esta manera, son ya cuatro los tripulantes del buque que han aceptado el ofrecimiento que el juez Santiago Pedraz -instructor de la causa- les hizo el pasado noviembre cuando se desplazó hasta Gernika y Vigo para tomarles declaración.

Una sentencia obliga a trabajadores a recuperar días de asuntos propios

Una sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo considera que los trabajadores de la empresa Securitas Seguridad España, S. A. que disfruten permisos retribuidos por asuntos propios deberán devolver a la empresa las horas que no hayan trabajado durante ese

permiso, ya que las mismas no se computan como jornada de trabajo y, por tanto, son recuperables.

El sindicato Comisiones Obreras de Asturias (CC OO) promovió un conflicto colectivo en la empresa de seguridad para que no se obligue a los trabajadores a recuperar las horas disfrutadas por el concepto de asuntos propios, ante las dudas surgidas por la interpretación del convenio colectivo vigente. El sindicato creía que las horas disfrutadas deben computarse como jornada y que no son recuperables como aseguraba la empresa.

La sentencia viene a poner claridad en un asunto de interpretación del convenio colectivo en una empresa de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada que en Asturias da empleo a seiscientos trabajadores.

El letrado de la compañía, Ángel Balbuena, explicó ayer que «si bien la sentencia se refiere a los centros de trabajo del Principado, su contenido podría afectar también a los 25.000 trabajadores que la empresa de seguridad tiene en toda España y también a todos los permisos retribuidos por asuntos propios establecidos en otros convenios colectivos de Asturias».

La sentencia del Juzgado de Oviedo puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero Balbuena cree que la alta consistencia de este fallo hará muy difícil la rectificación. Y es que dicho fallo se basa en otras tres sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial, de 1993, y las otras dos del Supremo, de los años 1995 y 2007.

La demanda de Comisiones Obreras se produjo después de que un trabajador solicitara en mayo de 2009 a la empresa un permiso retribuido por asuntos propios que le fue concedido, si bien en el cálculo mensual de las horas de trabajo no se computó por ese día ninguna hora.

Contradicción

La juez reconoce en la sentencia que el punto principal que hay que resolver es «una eventual contradicción entre la aplicación de una jornada de 1.766 horas anuales y el efecto sobre ésta de los permisos por asuntos propios». La sentencia dice que «lo que pretende el sindicato es que el día de asuntos propios cuente como día trabajado a efectos del cómputo de la jornada mensual, mientras que la empresa, por ese día de asuntos propios, no computa ninguna hora según consta en el informe de horas trabajadas».

La sentencia dice también que el

argumento decisivo a efectos de la recuperación de las horas «es el de la contradicción entre la jornada convencional de 1.766 horas del artículo 26 del convenio colectivo de la empresa de seguridad y el efecto de recuperación del permiso por asuntos propios».

Xinzo contratará seguridad privada si abre el polideportivo como albergue en el Entroido

No hay confirmación sobre la libertad total de horarios para los hosteleros

Los Concellos de Xinzo y Verín coincidieron ayer en la presentación oficial de sus programaciones de Entroido, que en el primero de los casos sirvió además para dar a conocer el cartel anunciador, obra de la joven Elsa Gómez Villariño, de 23 años y estudiante de Diseño Gráfico, que se presentaba por primera vez al concurso y recibirá los 800 euros del premio.

Por lo que respecta a otros aspectos organizativos, el concejal de Cultura, Daniel Blanco matizaba que todavía no se ha tomado una decisión en firme sobre la petición del PSOE para habilitar el pabellón polideportivo como albergue para los que quieran usarlo con sacos de dormir.

«Estamos pendientes de que informe a Concellalía de Deportes que ten que valorar si existe risco de que podan producirse danos importantes, pero o que si temos claro é que si se abre se cobrará algo aos usuarios para controlar dalgún xeito o aforo e que non acabe sendo un caos, e tamén teremos que contratar seguridade privada», señaló el concejal. Al tratarse de una instalación municipal la responsabilidad civil por cualquier incidente es del concello.

Lo que sí se ha descartado definitivamente es la otra petición socialista para colocar baños portátiles. «Se poñemos dos que hai que conectar a rede de alcantarillado require de autorizacións e traballos que xa non daría tempo a facer, e si poñemos dos químicos teñen o inconveniente de ser moi lixeiros e por un lado poden acabar no río ou estorbando nas rúas», explicó Blanco. Por lo que respecta a las autorizaciones pedidas a la Xunta para ampliar los horarios de los locales de ocio, está confirmada la ampliación de una hora más para el Domingo Oleiro pero todavía no se recibió la conformidad del horario ilimitado para los días centrales.

Colaboración ciudadana

La presentación del programa -que por

Sección Sindical **SEGURIDAD PRIVADA**

cierto se inició ya el pasado Domingo Fareleiro- sirvió además para agradecer la labor del comité organizador, integrado por voluntarios, la Asociación A Pantalla y la Asociación de Mulleres O Fiadeiro. Esta última se encarga de la recaudación puerta a puerta y ayer se mostraban satisfechas de la respuesta vecinal y convencidas de obtener los 18.000 euros que consiguieron el pasado año.

La seguridad privada se reinventa para buscar su hueco en el mercado

Se busca nuevos nichos de mercado y se demandan profesiones muy concretas.

El desempleo es la principal preocupación para el 79% de los españoles, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una situación que, según todas las previsiones, se alargará aún durante mucho tiempo. La búsqueda de empleo es una de las principales tareas de muchos ciudadanos en España. Para otros, es la búsqueda de nuevos mercados que ayuden a reinventar sectores que parecían tenían poco desarrollo. Uno de ellos es el de la seguridad privada. Más allá de la actualidad que ha generado esta actividad a raíz del resurgir de la piratería y los riesgos de los pescadores que faenan en zonas peligrosas, el sector más urbanita trata de cubrir huecos que hasta ahora no concebían como posibles.

Es el caso de la Protección, Seguridad y Servicios Auxiliares, una empresa creada recientemente con la confianza de que existe un nicho de mercado todavía sin explotar. Se dirigen a un núcleo de población de clase media, media alta y en ocasiones incluso de un poder adquisitivo más bajo que necesita los servicios que ellos ofertan.

Crear valor

A diferencia de otras empresas de seguridad, esta compañía ha creado la figura del chófer con acompañamiento, que ofrece un trato personalizado a cada cliente. Es decir, el conductor, además de llevar el vehículo, trabaja como escolta y tiene que estar preparado para otras necesidades del usuario. Si, por ejemplo, tiene problemas de corazón, deberá saber auxiliarle en caso de urgencia. Si es aficionado a la navegación, el escolta tendrá que ser técnico de salvamento acuático.

Los servicios de escolta se realizan sin armas con lo que no necesita la autorización del Ministerio de Interior, matizan desde la compañía. Aseguran que han "encontrado un nicho en el que podemos explotar este servicio sin

problemas" y que están profesionalizando el servicio, hasta el momento desempeñado por personas sin la suficiente cualificación.

Por ahora, la compañía centra su actividad en el citado servicio, pero su propósito es entrar en nuevas áreas de negocio y eso que no es un buen momento para el sector de la seguridad privada.

Según las previsiones de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la facturación de 2009, aún pendiente de cerrarse, se situará en los niveles de 2006, con lo que alcanzará la mayor caída de actividad de su historia.

Nuevas Profesiones

Para quienes optan por la búsqueda de un empleo, la consultora de selección Adecco Professional ofrece algunas pistas sobre las profesiones más demandadas en 2010. La quinta edición de su informe Los más buscados no aprecia grandes cambios sobre los perfiles profesionales más solicitados en el pasado ejercicio, al tiempo que apunta a una moderación de los salarios, después de un aumento constante de las retribuciones de los profesionales más demandados.

Uno de los perfiles más buscados este año será el ingeniero especializado en energías renovables. Se prevé que este sector genere un millón de empleos en diez años. También es muy importante la demanda de ingenieros aeronáuticos cuya oferta no cubre las necesidades. El analista especializado en fusiones y adquisiciones será otro de los más buscados. Médicos de familia o las ventas y el marketing también estarán en primera línea de demanda.

El informe que UPN usó contra la UPNA son sólo notas hechas por vigilantes de seguridad

LA EMPRESA DE SEGURIDAD ELABORA TODOS LOS MESES UN PARTE DE INCIDENCIAS DEL CENTRO

Fuentes de la Universidad destacan que nunca ha habido tanta tranquilidad en el campus como actualmente

JAVIER ENCINAS - Viernes, 29 de Enero de 2010 - Actualizado a las 07:18h.

PAMPLONA. El supuesto informe que destacados miembros de la cúpula de UPN han utilizado para arremeter contra la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y su equipo directivo en realidad no son más que notas que elaboran regularmente los

vigilantes de seguridad que trabajan en este centro académico.

Este documento, atribuido inicialmente a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), es una compilación de los partes de incidencias que redacta todos los meses la empresa encargada de la seguridad y que pone a disposición del rectorado. En definitiva, es un trámite que pretende recoger cualquier suceso que pueda alterar la normalidad de un centro en el que estudian más de 8.000 personas, de ahí que las anotaciones que en ellas figuran sean de variada temática y no siempre atribuibles, ni mucho menos, a miembros de Ikasle Abertzaleak (IA) y estén redactadas con cierto descuido.

ALGUNOS EJEMPLOS Este periódico ha tenido acceso a las anotaciones que realiza la empresa contratada para la seguridad de la UPNA. Los asuntos reflejados en ellas son muy diversos. Un ejemplo es el siguiente: "Recibimos un aviso que se detecta un incendio en la trasera del rectorado; se sofoca con extintores. Al parecer, algún individuo le dio fuego a las pelusas que caen de los chopos y se propagó por la orilla del río prendiendo hojas secas; una vez sofocado, se vigila por si vuelve a prenderse". Huelga decir que este parte de incidencias recoge un suceso que bien podría haberse ocasionado por la colilla de un cigarro y cuyo responsable podría ser un ciudadano ajeno a la UPNA.

Estos partes, que aluden a situaciones como que alguien queda atrapado en un baño o que fuma dentro de las instalaciones, también denuncian actos protagonizados por el sindicato estudiantil. "Varias personas de IA se concentran en la entrada principal del aulario, intentan cerrar las puertas de acceso al aulario y cortar el tráfico del parking", puede leerse en otras de las numerosas anotaciones realizadas por la seguridad privada de la UPNA y que nada tiene que ver con un informe de la Policía, como dejó claro la Delegación del Gobierno en Navarra en el comunicado que emitió el martes.

Vista nuestro foro en:

<http://csif.foroactivo.com>

Encontrarás muchas más noticias y otras informaciones de tu interés.